
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador del Estado

C. PPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO

MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 60 de la Constitución Política del Estado, vengo a promover ante esa H. Legislatura la siguiente INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 65 EN SUS FRACCIONES XV Y XXXI, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hablar de la sociedad democrática contemporánea es hacer referencia a un régimen social que sostiene compromisos irrenunciables hacia los gobernados. Entre ellos destacan, por su importancia, el derecho a la libertad, el principio de igualdad frente a la ley, el derecho a la información y el derecho a la transparencia en los actos de gobierno. El gigantesco potencial de transformación social que ha traído consigo la vigencia de estos principios básicos se pone en evidencia a la luz del desarrollo de la ciencia, la técnica, las artes e impacta, incluso, en las formas de convivencia social.

Este conjunto de cambios exige, a su vez, atender los requerimientos de los ciudadanos que provienen de las nuevas expectativas sociales y que exigen al gobierno combatir la corrupción y la impunidad, a través de nuevos modelos de control del gasto público.

En toda sociedad que se transforma también lo hacen sus instituciones, es por ello que los ordenamientos legales vigentes, de un momento a otro, habrán de reclamar sus correspondientes ajustes en torno a las expectativas sociales.

La transparencia y honestidad en el manejo de las finanzas públicas se imponen como prioridades si queremos rescatar la confianza de la gente en sus instituciones y en sus políticos. La responsabilidad insoslayable de los depositarios del ejercicio de la función pública es, en suma, trabajar con plena convicción y entrega en la construcción de una democracia de calidad, dotada de bases claras y objetivas, para evaluar el desempeño de todos y cada uno de

los objetivos que la sociedad se propone a través de sus autoridades legítimamente constituidas y en acatamiento a las facultades que, al efecto, les concede la ley.

Seguramente es un valor compartido por todos, autoridades y ciudadanos, que la paz y la estabilidad sociales deben tener como soporte fundamental el gobierno de la ley, la efectiva rendición de cuentas y la reciprocidad en un marco de libertad e igualdad, de los ciudadanos.

El esfuerzo de constitución de los fondos públicos es, y no puede dejar de ser, empresa de todos; la gestión pública, ejercida con dichos fondos y en representación de la soberanía popular, no puede seguir siendo administrada bajo criterios patrimoniales. El poder público no puede sino producir actos igualmente públicos. La información que de ellos se deriva, es propiedad de todos. La facultad que otorga la ley a quienes ejercen fondos y programas públicos no concede derecho alguno para su aplicación discrecional ni, menos aun, para el ocultamiento.

La transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos económicos se convierten hoy en premisa fundamental del desarrollo político. Entre más y mejor informados estén los ciudadanos y entre más y mejor sean administrados los fondos públicos, más enriquecedor resultará el diálogo político y al mismo tiempo, estaremos sentando las bases para que la participación social contribuya a la construcción del bien común.

Esta iniciativa será punto de partida para una gran reforma de estado, de la cual indudablemente saldrán fortalecidas las instituciones. La actualización del universo legislativo de Zacatecas será también una tarea en la que participarán, no hay la menor duda, los tres poderes bajo el sistema de consenso, recogiendo invariablemente las propuestas ciudadanas.

ESTRUCTURA LOGICO JURIDICA.

La iniciativa que se somete a consideración de esta Honorable Legislatura para crear un Tribunal de Cuentas, reforma la Fracción XV del artículo 65 de la Constitución Política del Estado, para facultar y obligar a la legislatura a expedir la ley del Tribunal de Cuentas. Así mismo la fracción XXXI del mismo precepto, para garantizar la recepción del informe que anualmente deberá rendir el órgano fiscalizador a la legislatura y para precisar que ésta no puede modificar el fondo del resolutivo del Tribunal.

Se reforma la sección séptima con todos sus párrafos del artículo 71 de la Constitución Política del Estado, para precisar que el Tribunal de Cuentas es un órgano de control administrativo con funciones jurisdiccionales y único fiscalizador de las cuentas y de la gestión del estado, de los municipios y de sus entes públicos. Para precisar además que el Tribunal depende directamente de la legislatura y ejerce sus funciones por delegación de ésta.

El Tribunal de Cuentas es la única autoridad que puede aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas que rindan los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, los municipios, organismos autónomos, partidos políticos, entes o personas que reciban, posean o administren fondos o bienes fiscales del estado.

El Tribunal de Cuentas no solamente fiscaliza la aplicación de los fondos públicos, también comprueba el sometimiento de la actividad económico-financiera a los principios de legalidad, eficiencia y economía, sancionando la malversación, incorrecta, incompleta o hasta la mala justificación del dinero del erario público.

Las resoluciones del Tribunal tienen fuerza ejecutiva y su cumplimiento se exigirá con intervención de los jueces. Invariablemente el tribunal debe resolver sobre la responsabilidad resarcitoria y sus determinaciones definitivas son recurribles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Anualmente el Tribunal de Cuentas entregará a la Legislatura un informe pormenorizado sobre infracciones y responsabilidades.

El Tribunal de Cuentas se integrará con tres auditores superiores, propuestos uno por cada poder y deberán contar con experiencia no menor de cinco años en materia de control, auditoria financiera y de responsabilidades. Su periodo será de siete años y no podrán ser reelectos. El titular del Tribunal de Cuentas será electo, de entre los tres auditores superiores, por las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura, en términos que ordena el artículo 116 fracción II, párrafo quinto de la Constitución federal.

Los titulares del Tribunal de Cuentas percibirán igual que los magistrados locales, durarán en su encargo siete años y no pueden ser reelectos. Sólo serán removidos por causa grave.

En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esa H. Legislatura la siguiente:

INICIATIVA MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 65 FRACCIONES XV Y XXXI Y 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XV y XXXI del artículo 65 y se reforma el artículo 71, ambos de la Constitución Política de los Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para quedar como sigue:

Artículo 65.- Son facultades y obligaciones de la Legislatura:

I a la XIV...

XV. Expedir la ley que regule la organización del Tribunal de Cuentas del

Estado y las demás que norman la gestión económica, control y evaluación de los tres poderes del estado, municipios y sus respectivos entes públicos.

Evaluar, con respeto absoluto a la autonomía técnica y a las determinaciones del Tribunal de Cuentas, el desempeño de las funciones de ésta entidad fiscalizadora, en los términos que disponga la ley;

XVI a la XXX...

XXXI. Recibir del Tribunal de Cuentas para su análisis, el informe anual que este órgano le enviará sobre las infracciones o/y responsabilidades en que a su juicio hubieran incurrido los órganos fiscalizados; el nombre de las dependencias involucradas, así como el de los implicados y su grado de responsabilidad. En la evaluación que haga la Legislatura, ésta no podrá modificar, ni hacer observaciones en cuanto al fondo del dictamen del Tribunal;

XXXII a la XLVIII...

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ENTES PÚBLICOS

Artículo 71. Para dar cumplimiento a las facultades de la Legislatura en materia de revisión de cuentas públicas, contará con el Tribunal de Cuentas del Estado, que será un órgano de control administrativo con funciones jurisdiccionales, único fiscalizador de las cuentas públicas y de la gestión económica del Estado, de los organismos públicos autónomos, de los municipios y de sus entes públicos, así como de las persona físicas o morales, públicas o privadas, que reciban dinero o valores de fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas tendrá autonomía presupuestal, por lo que anualmente presentará de manera directa su proyecto de presupuesto a la Legislatura, ante quien rendirá su informe de egresos correspondiente.

El Tribunal de Cuentas del Estado, es la única autoridad que puede aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los entes señalados en el párrafo primero que antecede. La función fiscalizadora de éste Tribunal, se concreta en un conjunto de actuaciones para comprobar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público y del sector privado que reciba dinero o valores de fondos públicos, a los principios que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución, en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gasto público, contribuyendo a garantizar la adecuada utilización del erario e

impidiendo así la malversación de los fondos públicos del Estado o su incorrecta, incompleta o mala justificación.

En las cuentas públicas no hay reserva de información, por lo que cualquier ciudadano podrá acceder a las resoluciones definitivas del Tribunal de Cuentas del Estado, en las que ya no sea procedente legalmente ningún recurso.

El Tribunal de Cuentas del Estado, de conformidad con su Ley Orgánica, determinará su organización interna y funcionamiento y se integrará con tres auditores superiores.

La elección de los auditores superiores del Tribunal de Cuentas del Estado, se sujetará a lo siguiente:

- I. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado presentarán, cada uno, sólo una terna para la elección de uno de los auditores superiores del Estado;*
- II. La Legislatura del Estado elegirá a los auditores superiores por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, y*
- III. La Legislatura, igualmente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, elegirá a quien de entre los auditores superiores, fungirá como Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado.*

Para ser auditor superior del Tribunal de Cuentas del Estado se requiere contar con experiencia mínima de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, y VI del artículo 97 de esta Constitución y los que señale la Ley. Durante su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los auditores superiores del Tribunal de Cuentas del Estado durarán en su encargo siete años, no podrán ser reelectos y sólo podrán ser removidos por las causas graves que la ley señale y con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución.

Los auditores superiores del Tribunal de Cuentas del Estado recibirán la remuneración salarial que corresponda a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en tanto que el Titular recibirá la remuneración correspondiente a la del presidente del referido Tribunal Superior de Justicia.

Los entes señalados en el párrafo primero de este artículo facilitarán los auxilios que requiera el Tribunal de Cuentas del Estado para el ejercicio de sus funciones, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos deberán proporcionar la información y documentación que solicite el Tribunal de Cuentas del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que señale la ley.

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas tendrán fuerza ejecutiva y la acción que se ejercite para exigir su cumplimiento, se regirá por el procedimiento del juicio de apremio con la intervención del Poder Judicial del Estado. Invariablemente el Tribunal deberá resolver sobre la responsabilidad resarcitoria. Las determinaciones definitivas son recurribles ante el Tribunal Contencioso Administrativo de acuerdo a las leyes de la materia.

Sin perjuicio de su propia jurisdicción o autonomía técnica, el Tribunal de Cuentas del Estado remitirá a la Legislatura un informe anual, que entre otros aspectos comunicará las infracciones y responsabilidades en que, a su juicio se hubiesen incurrido; el nombre del ente involucrado, así como el o los presuntos responsables y su grado en que lo sean.

Todos los informes que el Tribunal de Cuentas del Estado remita a la Legislatura, incluyendo el resultado de las cuentas rendidas por ese poder, serán leídos en sesión pública del Pleno.

El Tribunal de Cuentas del Estado tendrá a su cargo:

- A. Fiscalizar los ingresos y los egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y los recursos por parte de los entes precisados en el párrafo primero de este artículo, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

Sin perjuicio de los informes a que se refiere el párrafo anterior, en situaciones que determine la Ley, podrá requerir a los sujetos de fiscalización la presentación de la documentación e informes relativos al ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos a su cargo. Asimismo, sin perjuicio del principio de anualidad, el Tribunal de Cuentas del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y

concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y acciones a promover que el Tribunal de Cuentas del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

También, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. El Tribunal de Cuentas del Estado rendirá un informe específico a la Legislatura y, en su caso, fincará las responsabilidades ante las autoridades competentes.

- B. Entregar el informe del resultado de la revisión de las Cuentas Públicas a la Legislatura, dentro de los cinco meses posteriores a su presentación. Dentro de dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización del manejo de los recursos y la verificación del desempeño en el cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados, que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los entes fiscalizados hayan presentado. Este informe del resultado será sometido a la consideración del pleno de la Legislatura y tendrá carácter público.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado, dará a conocer a los entes fiscalizados la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstos presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por el Tribunal de Cuentas del Estado para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

El Tribunal de Cuentas del Estado enviará a los entes fiscalizados, dentro de los 10 días hábiles posteriores a que

sea entregado a la Legislatura el informe del resultado, las observaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 20 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en la ley. Lo anterior, no aplicará a las denuncias penales y a las promociones de responsabilidad, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que señale la ley.

El Tribunal de Cuentas del Estado deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por los entes fiscalizados, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las observaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño los entes fiscalizados deberán precisar ante el Tribunal de Cuentas del Estado, las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

El Tribunal de Cuentas del Estado, deberá entregar a la Legislatura en los plazos que establezca la ley, un informe sobre la situación que guardan las observaciones y acciones promovidas .

El Tribunal de Cuentas del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo. La Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

- C. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos públicos, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos.
- D. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Estado o Municipios o al patrimonio de los entes públicos paraestatales y paramunicipales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Séptimo de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la Ley.

Sí en un plazo de seis meses de presentada la denuncia de hechos ante el Ministerio Público competente, este no resuelve sobre el ejercicio de la acción penal, el Tribunal ejercerá la acción penal ante los tribunales correspondientes, lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; constituyéndose así en parte acusadora.

- E. Fiscalizar los recursos que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior, deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos que le sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, y

Las sanciones y demás resoluciones del Tribunal de Cuentas del Estado, podrán ser impugnadas por los entes fiscalizados y, en su caso, por los servidores públicos afectados ante el propio Tribunal de Cuentas del Estado o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro del término de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de este Instrumento Legislativo, el Poder Legislativo expedirá la ley que crea el Tribunal de Cuentas del Estado, y las reformas a las leyes orgánicas del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y la del Municipio, así como todas aquellas que tengan que ver con el contenido de ésta reforma constitucional; derogando o abrogando además las disposiciones que se opongan a éste contenido.

ARTÍCULO TERCERO.- En un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Legislatura procederá a

integrar el Tribunal de Cuentas del Estado, designado a los Auditores Superiores y a su Presidente, conforme a las siguientes bases:

- a. Tres días posteriores a la publicación del presente decreto, el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura notificará a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial de su obligación de enviar la terna correspondiente, para la designación de los Auditores Superiores del Tribunal de Cuentas del Estado.
- b. Los Titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán enviar su terna en un plazo improrrogable de quince días a partir de la notificación precisada en la base anterior.
- c. El actual Auditor Superior del Estado cesará en sus funciones a la publicación del presente decreto, y será sustituido provisionalmente conforme a la ley en la materia.

Los recursos humanos, financieros y materiales de la Auditoría Superior del Estado, pasarán a formar parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan este Decreto.

Zacatecas, Zacatecas; a doce de septiembre del dos mil diez.